

El papel del

PSOE

en el régimen posfranquista

dossier

Grupo de

Estudios Históricos

de las Juventudes Comunistas.



1

Edita:

Juventudes Comunistas

juventudes.org

índice

+ introducción	página 2
+ antecedentes	página 3
+ del 'viejo' PSOE al 'nuevo' PSOE	página 4
+ en el gobierno	página 7
+ años finales y conclusión	página 11
+ bibliografía	página 12

introducción

Las organizaciones comunistas somos conscientes de la importancia que tiene usar la memoria como un arma ideológica. La importancia de no olvidar la trayectoria histórica ejemplar de lucha de nuestra militancia y de no olvidar los conflictos sociales y políticos en los que se ve de forma más clara la lucha que se deriva de la contradicción capital-trabajo. En definitiva, se trata de hacer memoria y seguir valiéndonos de los ejemplos históricos, frente a los pactos de olvido y silencio, para seguir adelante en la misma lucha: por la emancipación y el socialismo.

Sin embargo, la memoria como arma ideológica no solo consiste en rememorar las luchas del pasado para poder continuar las del presente, aprendiendo de sus aciertos y sus errores. También se trata de no olvidar que la situación en la que vivimos hoy en día no es casual: hay unas circunstancias históricas y unos actores políticos que, en función de en qué lado de la trinchera se han posicionado y se posicionan, son responsables y cómplices de la situación actual.

En un momento histórico como el actual, con el agotamiento del régimen político que nació con la constitución de 1978, y de la denominada Transición, queremos dedicar este Dossier del Grupo de Estudios Históricos de la UJCE a que no caiga en el olvido el papel que ha jugado el partido por excelencia de dicho régimen: el PSOE. Para comprender la naturaleza de todas las decisiones que tomó el Partido Socialista durante sus años de gobierno, nos tenemos que retrotraer a los momentos en los que se empezó a gestar el nuevo sistema político. Así veremos como el PSOE puso su sello e impronta en todo el proceso histórico posterior, caracterizado por un tímido desarrollo de lo que se conoce como «Estado del Bienestar» que servirá para paliar las medidas de ataques y restricciones a la clase trabajadora, subordinación a las élites económicas y a los intereses geoestratégicos de EE.UU.

.....

antecedentes

El primer esbozo del sistema político actual se realizó en torno a finales de la década de 1940 con las conversaciones entre socialistas y monárquicos. En ellas, Indalecio Prieto por el PSOE y Gil Robles por los monárquicos negociaron una restauración monárquica ante una -en ese entonces- posible caída del régimen de Franco (con condena en 1946 de la ONU incluida). La fórmula política en torno a la que circulaban las negociaciones era una monarquía constitucional con la hegemonía de Gil Robles, con el apoyo de la izquierda moderada -exclusión del PCE- y dirigido por militares. En este proyecto se contaría con el apoyo de importantes sectores financieros, como el de Juan March, que ya había financiado el golpe de Estado del 18 de julio (Garcés 1996:32-51).

Este marco, muy parecido (con sus matices) al que se impuso en la denominada Transición, fue anulado por dos cuestiones: por un lado, el compromiso de la monarquía y de Juan de Borbón con el régimen de Franco al aceptar el formato de restauración de la monarquía impuesto por Franco (sin plazos concretos, ni regente) en agosto de 1948, en el mismo momento en el que se desarrollaban las negociaciones finales entre Indalecio Prieto y Gil Robles, las cuales quedaron totalmente invalidadas. El otro principal escollo es el enrolamiento de la España franquista en la Guerra fría, dentro del ámbito de actuación de EE.UU. contra la URSS. Este enrolamiento fue una realidad a partir de 1950, y se formalizó en 1953 con la firma de convenios internacionales suscritos entre España y EE.UU. que conllevaban la instalación de bases militares permanentes en España (Garcés 1996:73-157). Desde la década de 1920, los EE.UU. desarrollaron una lógica que legitimaba el apoyo a dictaduras de derechas en nombre de la libertad, basándose en el hecho de que protegían los intereses del comercio e inversiones estadounidenses, y alineaban a sus gobiernos contra los enemigos de Norteamérica (Fontana 2012:8). Esta es la lógica que se aplicó a España por parte de EE.UU., pero la integración militar de España en la esfera de influencia de EE.UU.

no respondía solamente a un parámetro geoestratégico, sino también económico de relación entre la estructura social interna de España, acomodándola a los intereses económicos y financieros de EE.UU. Esta relación permanecería atada mientras vivía el dictador, pero requería de una actualización cuando se acabara ese ciclo de vida.



del 'viejo' psoe al 'nuevo' psoe

El PSOE en el exilio había quedado sustentado con la dirección encabezada por Rodolfo Llopis y su núcleo dirigente afincando en Toulouse. Se caracterizaron por su práctica autoexclusión de la lucha antifranquista debido a su rigidez táctica y sus prejuicios contra el PCE, de manera que era su principal labor la de mantener unas siglas históricas. La dirección desconfió de los socialistas que actuaban en el interior y de cualquier estrategia de colaboración con el PCE y las nuevas Comisiones Obreras. Al ser los cuadros comunistas quienes desempeñaban el papel hegemónico de la lucha antifranquista, tanto el PSOE como la UGT se aislaron de la lucha contra la dictadura en la calle, asumiendo ese espacio el PCE y otras organizaciones, algunas de ellas se reclamarían socialistas, entre las que destacarían los pequeños grupos de la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), el Frente de Liberación Popular (FLP) y el conocido como «grupo de Tierno» (Andrade 2012:112-116).

Esta es la situación que se da en el entorno socialista a principios de la década de 1970. En 1972 se produce un cisma en el PSOE del que salen dos direcciones: históricos (Llopis) y renovadores (el entorno de Felipe González y del exiguo PSOE del interior, aunque con dirección colegiada). Estos dos sectores serían los que se disputarían la legitimidad otorgada por la Internacional Socialista (IS). A pesar de que el aparente radicalismo verbal de los renovadores podía jugar en su contra, finalmente fueron los elegidos por la IS en enero de 1974, pues se consideró que tenían más contacto con la realidad del interior de España (Andrade 2012:117-122). Una vez que se produjo esto, se empezó a movilizar toda la maquinaria internacional para financiar (y cooptar) al PSOE renovador, en un momento en el que se acercaba el fin del ciclo vital de Franco y había que sustituir el régimen sin arriesgar el sistema de poder instaurado en 1939. Así, las estructuras socioeconómicas internas se mantendrían y los centros de decisión de la guerra fría reafirmarían su dominio sobre los territorios y recursos españoles (Gar-

cés 1996:171-174). De esta manera, los viejos planes congelados a finales de la década de 1940 se ponían otra vez en funcionamiento. Es en este contexto, con el sello de validez de la Internacional Socialista sobre el PSOE renovador, cuando se produce en 1974 el XXVI Congreso del PSOE, también conocido como el de Suresnes, por el nombre de la ciudad donde se realizó. Este congreso, en el que se eligió a Felipe González como Secretario General, se realizó con el apoyo de instancias internacionales y de poderes fácticos para frenar el auge de las organizaciones comunistas en un contexto de guerra fría (Andrade 2012:124). Así, en un congreso financiado por la República Federal Alemana (RFA), dirigida en ese entonces por el Partido Socialdemócrata (SPD), se sentaron las bases para la creación del nuevo PSOE, y más concretamente, la realización de una campaña de marketing para incluir en la opinión pública nombres de cuadros del PSOE que hasta ese entonces eran desconocidos para la mayoría de la población (Garcés 1996:167).

Curiosamente, en este cónclave (y en el XXVII Congreso, en 1976) salió adelante una línea ideológica (en lo verbal) muy a la izquierda. Así, el PSOE aprobaba en sus documentos su definición como un partido marxista, de clase, cuyo objetivo era acabar con el capitalismo y abolir el Estado. Su modelo se pretendía aplicar en base a un «socialismo autogestionario», mediante el cual defendían la socialización de los medios de producción. Además, se declaraban internacionalistas, y «antimperialistas», planteando una política internacional de no-alineación (Andrade 2012:125-131).

No obstante, partiendo de la base de que los planes estratégicos marcados por la posición de España en la zona de influencia occidental, en un contexto de guerra fría, y del papel designado por la Internacional Socialista al PSOE, cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué sentido tenía asumir esa radicalidad verbal si los planes estratégicos para el Estado español eran otros? La respuesta a esta pregunta es sencilla y res-

ponde a la lógica interna que se estaba produciendo en el Estado español y a la correlación de fuerzas en la oposición antifranquista. Básicamente, el nuevo PSOE tenía que competir con múltiples organizaciones socialistas que tenían un rasgo en común: acusar a la socialdemocracia de su integración en las estructuras capitalistas. Pero, sobre todo, tenía que hacerse un espacio propio para poner fin a la hegemonía del PCE en la lucha contra el franquismo (Moliner y Ysas 2008:29), puesto que era este el principal dictado que le había transmitido la IS, como ya se ha visto.

Además, en la formulación teórica del marxismo aplicado en el PSOE se apreciaba cierta improvisación, es decir, no era mediante un proceso depurado de formación, sino que se debía a una falta de identidad ideológica de un PSOE desdibujado por los años de inactividad en la lucha contra el franquismo. De esa forma, se cubriría ese vacío. Además, la escasa trascendencia social, en cuanto a número de militancia se refiere, favorecía esa contundencia, pues no tenía que reconciliar sus comunicados con la lucha cotidiana de sus militantes. Y, sobre todo, el uso de la ideología como elemento propagandístico fue algo cotidiano. Ya se había usado el marxismo para distanciarse de Rodolfo Llopis, y ahora se usaba para competir con el PCE en los espacios de oposición a la dictadura, para emparentar con las vanguardias antifranquistas en la perspectiva de cooptar a alguno de los cuadros, y con el objetivo de no ceder espacio a las organizaciones a su izquierda (Andrade 2012:40-139). Esta estrategia de cooptación sería la de atraer a cuadros políticos que tienen experiencia de lucha contra el franquismo, que tienen formación política y que podrían ocupar responsabilidades en el partido. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de todo, el PSOE seguía sin músculo militante en el interior; dicha estrategia que fue muy útil posteriormente, una vez se convirtió en un partido del régimen, para cooptar a cuadros oportunistas de otras formaciones

Como ya habíamos visto, las estructuras socioeconómicas construidas durante el fran-

quismo aceptaron la reforma política en la medida en que las consolidaba y, al mismo tiempo, las adaptaba a Europa (Garcés 1996:179). Sin embargo, el grado de tolerancia no fue igual para todas las organizaciones: mientras el PSOE y la UGT celebraban sendos congresos (XXVII y XXX, respectivamente), con su respectiva publicidad, se seguían encarcelando a cuadros sindicales del PCE y de las Comisiones Obreras (Moliner y Ysas 2008:30). De hecho, mientras se celebró el XXX Congreso de la UGT en abril de 1976, se prohibió la asamblea general de CC.OO. en junio del mismo año (Ruiz 1993:479). Las elecciones del 15 de junio de 1977 (en las cuales el PCE había sido legalizado a escasas semanas de la cita electoral, y en las que otras organizaciones políticas no habían sido legalizadas) supusieron un triunfo para el PSOE, que se quedaba oficialmente como el partido mayoritario del espectro social de la izquierda, ocupando el espacio del PCE, con el 28,9 % de los votos y 118 diputados. En este triunfo favoreció especialmente la retórica izquierdista y los apoyos morales -y materiales o financieros- de la Internacional Socialista (Moliner y Ysas 2008:33). Tras este triunfo, el PSOE combinó sus dos caras de entonces: planteaba un discurso izquierdista, pero al mismo tiempo una política de seguidismo, pues en la línea práctica apoyaba todos los acuerdos que se iban planteando (Constitución, Pactos de la Moncloa, etc.), ya que todavía le interesaba tener una pose más a la izquierda para consolidar el espacio hegemónico en la izquierda.

Es ya a partir de las elecciones de 1979 cuando el crecimiento electoral del PSOE se empieza a estancar, a pesar de la integración de otros partidos socialistas regionales en su seno. La postura izquierdista del PSOE había tenido una rentabilidad inicial a la hora de aislar a los partidos a su izquierda, pero en ese momento suponía un lastre, sobre todo si se quería tranquilizar a los poderes financieros, y en general a la estructura socioeconómica privilegiada de España (Andrade 2012:148). Una cosa era la retórica para alcanzar una posición mayoritaria que le permitiera acceder al poder, y otra cosa es que de la retórica se pasara a la acción, o que

en el gobierno quedarán reminiscencias hacia la socialización de los medios de producción, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, el antimperialismo, etc. Sin embargo, se pedía una prueba de fuego y esa fue la renuncia al marxismo.

El XXVIII congreso del PSOE se celebraba en mayo de 1979 y allí se debatía la propuesta de la dirección encabezada por Felipe González que consistía en eliminar el término «marxista» de la definición ideológica del partido. Fue Joaquín Almunia quien defendió esa postura de renuncia. Finalmente, las bases del propio PSOE rechazaban la propuesta con un 61,07 % de los votos, mientras que la postura oficialista recibió el 31,11 %. En un clima de confusión y agresividad tomó la palabra Felipe González, quien afirmó que no se presentaría a la reelección por disconformidad con las tesis aprobadas. Por último, se tomó la decisión de convocar un congreso extraordinario en el mes de septiembre de 1979 para tratar estas circunstancias (Andrade 2012:149-151).

Este es el momento clave; El punto de no retorno en la deriva y traición a la tradición emancipadora que por razones históricas albergaban las siglas del PSOE. Se trataba del momento en el que o bien se producía una capitulación de todas las estructuras orgánicas del Partido Socialista a las exigencias de los grupos de poder y de los intereses internacionales y poderes financieros, o bien por el contrario esa capitulación quedaba exclusivamente circunscrita al ámbito de la dirección. En ese caso, se produciría una fractura política importante que conllevaría un problema en el desarrollo de los planes que existían para el Estado español, lo que dificultaría la mejor integración de la estructura socioeconómica española en Europa. Por eso, entre los meses de mayo y septiembre, se pusieron a funcionar la estructura orgánica del PSOE generando unas normas que permitieran la celebración de un congreso parecido al XVIII: prohibición de elección de delegados de base (solo a nivel regional o provincial, voto en conjunto de delegaciones en detrimento del individual, etc.) (Andrade 2012:151).

Otro de los mecanismos que se pusieron en marcha para imposibilitar que se mantuviera en el PSOE la denominación de «marxista» fue el papel de los medios de comunicación. A pesar de su aparente pluralidad, todos los medios se posicionaron en contra de aquellos que defendían la propuesta marxista en el PSOE. La prensa consideró el debate del marxismo en el PSOE como un desafío a la viabilidad de la Transición, de manera que exaltaron a Felipe González como el prototipo de hombre honesto dispuesto a renunciar a su cargo por principios, mientras que a los que defendían la propuesta marxista eran tildados de irresponsables o antidemócratas (Andrade 2012:328-330).

El culto a la personalidad de Felipe González y el hecho de que la organización del congreso propicie los vetos de las direcciones provinciales y regionales, sumado a la brutal campaña mediática, generaron todos los elementos para que las tesis marxistas fueran derrotadas en el congreso extraordinario. De esta forma, ya estaba el PSOE en condiciones para el papel que le tocaba jugar.

.....

en el gobierno

Superado el citado escollo, el PSOE preparaba su maquinaria y adecuaba el discurso para poder entrar en la Moncloa. Los problemas del país antes se expresaban en términos de intereses de clase contrapuestos y conforme el PSOE se va acercando a las elecciones de 1982, esos problemas son resolubles por «conocimientos técnicos» (Andrade 2012:33).

Las elecciones de 1982 están marcadas por la intentona golpista del 23-F. Aunque este no es el momento de analizar este acontecimiento, lo que está claro es que esto motivó dos situaciones: hizo que se aceleraran los planes de entrada en la OTAN (gobierno Calvo-Sotelo), y condicionó las elecciones de 1982 (Garcés 1996:211). El 23-F benefició al PSOE por la sensación de impotencia que transmitía la UCD y por el sentimiento de que ante la intentona golpista había que apostar por el «consenso» y la moderación, perfectamente representado en el PSOE, frente a otras opciones más ideologizadas (Andrade 2012:386). Estas elecciones también supusieron la instauración ya más depurada de un bipartidismo (aunque imperfecto por la diferencia con el segundo partido), marginando a las organizaciones políticas que eran «menos de fiar» para el sistema, y volcado al «centro», es decir, sobre el mantenimiento del status quo (Garcés 1996:217).

Así, el PSOE ganó las elecciones generales con un 48,11 % de los votos y 202 diputados. Sin embargo, si alguien dudaba con respecto a si el antiguo partido marxista iba a enfrentarse a los grupos de poder, esa duda quedó resuelta nada más empezar. Se tomó extremada cautela en todas las acciones que podían rozar a la Banca, la Iglesia o al ejército. La enseñanza privada continuaría recibiendo subvenciones, la Iglesia seguiría estando financiada por el Estado y el gobierno apoyaría a los poderes financieros y protegería a la «economía de mercado». De hecho, la única medida «nacionalizadora» fue la que afectaba a Rumasa, y dejaron bien claras sus intenciones cuando después de que la nacionalizaran y reflotaran con dinero públi-

co, esas empresas volvieron a ser privatizadas. Así se tranquilizaban a los mercados, algo que agradeció la Asociación Española de Banca Privada (AEB) (Marín Arce 2008:45).

Según se llegó a la Moncloa, se desplegó por parte del gobierno de Felipe González un nuevo discurso: el de la «modernización». Este discurso se basaba en una revisión histórica de todo proceso político anterior: la modernización de España había sido frenada por la proliferación de «ideologías extremistas» que tuvieron su máxima expresión en la Guerra Civil y que impidieron que España se pudiera acercar a Europa. En ese sentido, había que superar ese extremismo, los lastres del franquismo (que los identificaban con los «gremios» del Estado, es decir, el problema eran los trabajadores públicos en vez de la estructura socio-económica y las familias que acumulaban la riqueza)... En definitiva, la modernización y la regeneración interna pasaban por la europeización del Estado español (Andrade 2012:392-395). Se fue repitiendo el argumento de la modernización como elemento que serviría para cubrir lo que en verdad implicaba el ingreso en la CEE: dirección económica, directrices diplomáticas, etc. Se trata de actualizar el concepto añejo de subordinación, con otro más ambiguo como es el de la «modernización» (Garcés 1996:458-459).

Otro de los aspectos más polémicos del gobierno de Felipe González es el relativo al cambio de postura que tuvo con respecto a la OTAN. Previamente a las elecciones de 1982 Felipe González, y el PSOE, no querían generar una fractura en su electorado anti-OTAN, cuando -todavía- necesitaban de sus votos para alcanzar el gobierno (Garcés 1996:212). Por eso, antes de las elecciones de 1982, el propio PSOE inició una campaña exigiendo un referéndum sobre la entrada en la OTAN, y marcando su postura negativa, con el lema: OTAN de entrada NO. Aunque una vez entrado en el gobierno, ya en 1984 se empiezan a dar mensajes en la línea contraria desde algunos intelectuales orgánicos del PSOE, dando los siguientes argumentos: serviría para «democratizar» el ejército y consolidar la democracia en España; además de

servir para contener al «verdadero enemigo», la Unión Soviética, fomentando, así, la «paz mundial»; la permanencia de España en la OTAN beneficiaba a los «intereses nacionales» (Andrade 2012:401-404).

Es en octubre de 1984 cuando Felipe González presentó oficialmente al Congreso de los Diputados la postura oficial de su gobierno: permanencia en la OTAN, teniendo luego que convocar un congreso del PSOE, en diciembre de 1984, para que este avalara su postura. Finalmente el 71 % de los delegados al congreso ratificaban la nueva política proatlantista del PSOE (Marín Arce 2008:50-51).

Otro argumento fundamental que se daba era el que vinculaba la presencia en la OTAN con el proceso de integración en la Comunidad Económica Europea, remarcando las hipotéticas repercusiones que podría tener que finalmente no se integrara España en Europa. Felipe González -tras la firma del tratado de adhesión a la CEE en junio de 1985- decidió la convocatoria de un referéndum sobre la OTAN (Marín Arce 2008:51-52). Esa amenaza sobre la imposibilidad de integrarse en la CEE si no existía una integración en la OTAN no solamente venía de círculos del gobierno y del PSOE. El propio canciller alemán, el democristiano Helmut Kohl, también planteó que integrarse en la CEE obligaba a los españoles a subordinarse a la OTAN (Garcés 1996:458).

Toda esta campaña se produjo porque la mayoría de la población en los años previos al referéndum se posicionaba en contra de la entrada en la OTAN. Así, según el CIS, en marzo de 1983 el 57 % de la población declaraba que era «poco o nada partidario» de que España se integrara definitivamente en la OTAN, mientras que el 13 % era «muy o bastante partidario». Estas diferencias aumentaban en la base social del PSOE, pues el 71 % de sus votantes consideraban «poco o nada partidario», mientras que el 8 % era «muy o bastante partidario» (CIS 1983:236).

Finalmente, tras una dura campaña con muchas presiones de los intereses financieros, con el triunfo del sí a la OTAN (52,5 % de los votos) quedaban atados dos aspectos que llevaban mucho tiempo incompletos por la pervivencia del régimen franquista: la subordinación estratégica, política y miliar hacia los EE.UU., y la total intromisión del capital europeo en los engranajes del Estado y la economía española (puntera en fruta y pesca).

Todos estos mecanismos de subordinación a entes internacionales tienen una clara relación con las políticas futuras que se han aplicado en el Estado español, y que tuvieron su primera repercusión en los gobiernos de Felipe González. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un momento de auge del neoliberalismo (los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan) y de crisis de la socialdemocracia y del modelo poskeynesiano, todo ello dentro de una grave crisis económica que se había producido en la década de 1970, pero de la que todavía se podrían ver sus consecuencias hasta la mitad de la década de 1980. En este contexto internacional, el plegarse a las instancias económicas y militares suponía aceptar ese modelo neoliberal.

Es en este contexto cuando se entiende que mientras se produce un tímido desarrollo del denominado «Estado del Bienestar» como clara contraprestación ante la aplicación de una serie de políticas claramente neoliberales como son la reconversión industrial y la desregulación del mercado laboral, adaptándose a las «recomendaciones» de organismos internacionales como el FMI y la OCDE (Gálvez Biesca / Muñoz Barrutia 2004:13). Era la misma salida a la crisis que habían planteado los Pactos de la Moncloa, apenas había cambio en la política económica, solo con la diferencia de que quien lo aplicaba antes analizaba la realidad como una relación entre intereses de clase contrapuestos, mientras que ahora se trataba de un problema con una solución técnica, un problema de la «modernización» de España, que requería del impulso necesario (Andrade 2012:398).

Además, se imponía otro tipo de reformas destinadas a la moderación salarial, privatización de empresas públicas, menor progresividad fiscal, etc. Todo desde el planteamiento de que «era la única política económica posible» (Gálvez Biesca / Muñoz Barrutia 2004:20-21), es decir, el mismo dogma neoliberal que planteó Margaret Thatcher con su TINA (There is no Alternative). Concretamente, el número de empresas públicas que se privatizaron entre 1985 y 1996 ascendió a un total de 91 corporaciones públicas, entre las que destacarían Enagás, Argentaria, Repsol, Endesa, Telefónica, Seat, etc. (Sánchez Carreira, 2002:8-12). El Estado capitalista entrega ingentes masas de capital a la oligarquía para mejorar la posición de sus monopolios en el seno de la CEE y poder competir por mercados en sectores estratégicos.

Por su parte, la reconversión industrial generó, por un lado, un serio golpe a todas las familias de trabajadores que sufrieron las consecuencias de dicha política, con casi un millón de puestos de trabajo destruidos y múltiples consecuencias sociales para las familias que lo sufrieron. Sin embargo, por otro lado, los claros beneficiados de esta política fueron el sector bancario y empresarial: todas las empresas en crisis sometidas por la reconversión presentaban déficits económicos que fueron saneados con importantes ayudas públicas (Marín Arce 2008:56). Además, el gobierno realizó una táctica de culpabilizar a los trabajadores de su situación, pues si no se mejoraban las condiciones era por falta de voluntad para adaptarse al cambio y a la modernización (Gálvez Biesca / Muñoz Barrutia 2004:22).

Al mismo tiempo que se producía la reconversión industrial, el gobierno de Felipe González realizó una reforma del Estatuto de los Trabajadores que supuso otro duro golpe a la clase trabajadora. Con esta reforma se reestructuraban las condiciones de acceso, permanencia y salida del mercado laboral, en un momento de dura situación de desempleo. Se introduce una flexibilización del mercado laboral, con la instauración de los contratos temporales, lo que suponía una precarización de

las fórmulas contractuales, profundizando las desigualdades de las y los trabajadores ante el mercado laboral (Gálvez Biesca / Muñoz Barrutia 2004:23-24). De esta forma se cede ante las exigencias de la patronal, que ante una crisis económica, con un desempleo superior al 20 % de la población activa, demandaba más flexibilidad para despedir, y contratos más precarios y temporales.

Buena parte de la oposición en la primera legislatura de Felipe González la encabezó Comisiones Obreras. Remarcando su carácter sociopolítico (no ceñirse solo al ámbito empresarial, sino estar en la defensa de todo aquello que afecte negativamente a la clase trabajadora), asumió un papel de representación política en un momento que el PCE estaba en un proceso de crisis interna tras el fracaso del eurocomunismo. Para CC.OO., los primeros tres años de gobiernos del PSOE defraudaron todas las esperanzas de la clase trabajadora: generaron mayor división sindical, limitaron la negociación colectiva, represaliaron los conflictos laborales, y beneficiaron exclusivamente a la banca y a la patronal (Ruiz 1993:457-460).

En este contexto de oposición sindical, la UGT había desarrollado una táctica de respaldo a las posturas políticas del PSOE de ataque a la clase trabajadora (Marín Arce 2008:57). Solamente es a partir de 1985 cuando se empieza a dar un cambio en la UGT contra los recortes a las pensiones, aunque este giro no es suficiente para sumarse a la huelga general del 20 de junio de ese año contra esa reforma del sistema de pensiones, que fue convocada por CC.OO. y otros sindicatos minoritarios (USO, CNT, ELA-STV y INTG) (Ruiz 1993:475-476). Sin embargo, el conflicto entre PSOE y UGT va a más en los siguientes meses, con la disolución de la comisión mixta entre partido y sindicato, y con la dimisión de Nicolás Redondo y Antón Saracibar (Secretario General y Secretario de Organización de UGT, respectivamente) como diputados del PSOE en el parlamento (Marín Arce 2008:58). Este cambio de la estrategia de la UGT es un gran triunfo para CC.OO., pues implica que con la movilización se fuerza a la UGT

a cambiar su estrategia de seguidismo político hacia el PSOE, recuperando así la unidad sindical. Este es uno de los elementos más importantes para la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988.

Al vislumbrarse una mejora en la situación económica en 1986, se cambia la estrategia sindical, al pasar de una fase de resistencia a las agresiones a la clase trabajadora a una fase de ofensiva por la recuperación de todo el terreno perdido en los derechos laborales y sociales. Hay que recordar que entre 1982 y 1986 se habían producido casi un millón y medio de despidos (con un paro global del 21,5 %), mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores había sido reducido, justo al contrario que la productividad y los beneficios empresariales (Ruiz 1993: 516-517).

Así, en un momento de auge de la conflictividad social, el gobierno presenta el Plan de Empleo Juvenil (PEJ), también denominado en el ámbito sindical Plan de Esclavismo Juvenil, con el que se crearía un modelo de contrato para jóvenes entre 16 y 25 años, cuyo salario sería el mínimo interprofesional, y con una duración mínima de seis meses, y una máxima de dieciocho. Además, a las empresas que contrataran a jóvenes con este plan recibirían bonificaciones del 100 % en la Seguridad Social. Los sindicatos consideraron que este plan era una provocación por parte del gobierno y convocaron una huelga general para el 14 de diciembre de 1988.

Esta huelga fue un éxito total: el 94,86 % de la población asalariada secundó la huelga (Ruiz 1993:461). Este éxito se debió al reparto injusto de los costes de la crisis, al hartazgo ciudadano contra el gobierno, y a la alta capacidad de movilización de las organizaciones de la clase trabajadora. Tras esta demostración de fuerza, el gobierno de Felipe González no tuvo más remedio que retirar el PEJ, y dar un giro a su política económica que implicó varias conquistas de la clase trabajadora: un aumento del gasto social, una revalorización de las pensiones, aumento de la cobertura por desempleo

y ampliación de las prestaciones por desempleo de larga duración y de mayores de 45 años, así como mejoras en el sistema de pensiones. Esto suponía un modelo de protección social hacia quienes más habían pagado la crisis y la extensión de la cobertura sanitaria al 99 % de la población (Marín Arce 2008:63). Con esta huelga general se demostró que solo mediante la movilización y la lucha se consiguen mejoras para los intereses generales de la clase obrera. Por eso, la huelga general fue un elemento que volvieron a usar los sindicatos en 1992 (contra la reforma del subsidio por desempleo) y en 1994 (contra la Reforma Laboral del Gobierno).

También hay que decir que el gobierno del PSOE, a pesar de este giro social, siguió en la misma línea neoliberal que implicaba la aceptación de todo lo que venía de la CEE. Así se entiende la aceptación del Tratado de Maastricht, lo que se ha considerado la adaptación del Consenso de Washington a Europa, que implicaba la aplicación de medidas neoliberales a los países de la Unión, como el establecimiento de techos de gasto público, etc.

A pesar de este giro a la izquierda (forzado por la presión de la clase trabajadora), el gobierno de Felipe González entró en declive por los constantes casos de corrupción, así como por los casos de guerra sucia contra ETA, con la reapertura de los sumarios contra los GAL, y el procesamiento del Ministro del Interior, José Barrionuevo. Todo esto, finalmente, trajo como consecuencia la llegada al gobierno del Partido Popular en 1996 de la mano de José María Aznar (Marín Arce 2008:65-67).

años finales y conclusión

Intencionalmente, hemos desarrollado más los aspectos que se encuentran más alejados en el tiempo que los que son más recientes, pues son más conocidos. A pesar de un cambio (nuevamente verbal) en la orientación política del PSOE, una vez a su entrada en el gobierno de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, y ante la llegada de una nueva crisis, se volvió a optar por que la crisis, nuevamente, la volviera a pagar la clase trabajadora mediante los dictados de la Troika (FMI, BCE, y Comisión Europea). Así, se optó por rescates bancarios, la Reforma Laboral de 2010 (abaratada y facilita el despido), aumento de la edad de jubilación a los 67 (si no se cumple una serie de requisitos), desahucios exprés, mercantilización de la enseñanza (Bolonia), amnistía fiscal a defraudadores y un largo etcétera que culmina con el ataque más grande que se haya podido realizar: la reforma del artículo 135 de la Constitución, que institucionaliza el principio de estabilidad financiera, es decir, que se pague antes la deuda privada que la sanidad o la educación.

A modo de conclusión, podemos ver que el papel del PSOE queda marcado por la defensa de los intereses de la minoría de la población, aquella que acumula la mayoría de la riqueza y que se ha visto beneficiada por la crisis y el sufrimiento de la clase trabajadora. Esto no se debe a errores en la línea del PSOE, ni a ninguna cuestión peregrina. Como hemos visto, se trata de una cuestión histórica de compromiso con la línea estratégica de EE.UU., con las políticas neoliberales y con el enemigo de clase de las y los trabajadores: la oligarquía.

A pesar de un cambio (nuevamente verbal) en la orientación política del PSOE, una vez a su entrada en el gobierno de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, y ante la llegada de una nueva crisis, se volvió a optar por que la crisis, nuevamente, la volviera a pagar la clase trabajadora mediante los dictados de la Troika (FMI, BCE, y Comisión Europea).

A modo de conclusión, podemos ver que el papel del PSOE queda marcado por la defensa de los intereses de la minoría de la población, aquella que acumula la mayoría de la riqueza y que se ha visto beneficiada por la crisis y el sufrimiento de la clase trabajadora. Esto no se debe a errores en la línea del PSOE, ni a ninguna cuestión peregrina. Como hemos visto, se trata de una cuestión histórica de compromiso con la línea estratégica de EE.UU., con las políticas neoliberales y con el enemigo de clase de las y los trabajadores: la oligarquía.

.....

bibliografía

Andrade Blanco, Juan Antonio, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid: Siglo XXI, 2012.

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n.º 22, abril y junio, 1983.

Fontana, Josep, «Prólogo» en Andrade Blanco, Juan Antonio, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid: Siglo XXI, 2012.

Gálvez Biesca, Sergio y Gustavo Muñoz Barrutia, «Las contradicciones del socialismo: una aproximación a la historia política del PSOE en la transición (1972-1986)», en *Actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos: Guadalajara, 4-7 de noviembre, 2003*, vol. 2, 2004.

Garcés, Joan, *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid: Siglo XXI, 1996.

Marín Arce, José María, «Los socialistas en el poder (1982-1996)», en *Historia y Política*, Madrid, N.º 20, julio-diciembre, 2008.

Molinero, Carme y Pere Ysàs, «La izquierda en los años setenta», en *Historia y Política*, Madrid, N.º 20, julio-diciembre, 2008.

Sánchez Carreira, María del Carmen, «Una visión crítica del proceso de privatizaciones de la economía española», en *VIII Jornadas de Economía Crítica*: Valladolid, 2 de marzo de 2002.

Ruiz, David, *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid: Siglo XXI, 1993.

.....